

Los desencuentros en materia económica entre la Generalitat y el Estado español son múltiples y en relación a distintos aspectos, con puntos de vista que son radicalmente distintos. Así, en Catalunya se deplora el próximo decreto por el que se detraerá de los recursos que el Estado le transfiere la financiación de la escolarización en castellano de los alumnos que lo soliciten. También es motivo de discordia los datos de la última balanza fiscal disponible, presentada recientemente por el *conseller* **Mas-Colell**. Podemos hablar también del recurso presentado ante el Tribunal Supremo por la Generalitat por los acuerdos del Gobierno que fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria para el periodo 2013-2016. Tampoco olvidemos la

Intangibles

Jordi A. Solé Estadella

INSPECTOR DE HACIENDA



La financiación y la reforma fiscal

moción del Parlament catalán en la que se reclama al Gobierno de España la paralización de la reforma fiscal hasta que no se garantice que las comunidades no quedarán afectadas en sus ingresos a causa de las modificaciones que se prevén.

El Estado, por su parte, no se can-

sa de repetir el hecho de que no todas las comunidades han hecho el esfuerzo de reducción del déficit que les corresponde, destacando en el caso catalán el que se han perdido, entre enero y abril de este año, 188 millones de euros de ingresos, cuando el gasto público ha aumentado el

2,4%; o el que el Estado haya acudido al rescate de muchas de ellas, y de forma muy importante de Catalunya, que ha recibido el 43,6% del último pago del fondo de liquidez autonómico (FLA).

Aunque buena parte de esta confrontación no es más que una derivada del gran *casus belli* que es la consulta soberanista, la financiación autonómica debería ser revisada pronto, porque es un modelo que ha sufrido muchos impactos normativos como la recalificación del céntimo sanitario, o porque se ha aplicado sobre una economía que dista mucho de la que se tuvo en cuenta cuando se aprobó. Pero, sobre todo, porque –como todos– es un modelo que se asienta sobre el sistema fiscal existente en cada momento, por lo que cualquier cambio importante

del mismo afecta al núcleo esencial de la financiación autonómica.

Frente a ello, desde Hacienda se ha argumentado que bastante difícil es sacar adelante una reforma tributaria profunda (aunque no lo es tanto como los inspectores de Hacienda habríamos querido), como para mezclarla con el problema de la financiación de las autonomías. Por ello, pese a tener enfrente a poderosos dirigentes del PP, como los presidentes de Madrid, Baleares, sin contar con los de la propia Catalunya –quienes han achacado que el aplazamiento de esta reforma solo se debe a la falta de valentía ante el conflicto que se avecina y por «miedo a Catalunya» – lo cierto es que la posición de **Cristóbal Montoro** es contundente y, como decía el *president* **Pujol**, este tema, «hoy no toca». =